



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS ASPECTOS RECOGIDOS EN EL ARTÍCULO 116.4 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (LCSP), E INFORME JUSTIFICATIVO DE NECESIDAD, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO MIXTO DEL SERVICIO DE ARMONIZACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE DATOS Y EL SUMINISTRO DE LICENCIAS ASOCIADAS CON LOS SERVICIOS DE ARMONIZACIÓN EN EL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACION TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU (C18.I06.P02.S18).

De conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y el artículo 73 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se exponen a continuación los fines institucionales del organismo proponente cuyo cumplimiento requiere la realización de esta contratación. Igualmente, y a tal efecto, como parte de la documentación preparatoria, se determinan con precisión la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas.

Según se dispone en el Decreto 76/2023, de 5 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, y según Decreto 261/2023, de 29 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Digitalización, corresponde a la Dirección General de Salud Digital (DGSD): “La planificación, diseño, implantación y mantenimiento de los sistemas y tecnologías de la información para la organización y funcionamiento del Servicio Madrileño de Salud, de acuerdo con las necesidades explicitadas por este último, así como la tramitación electrónica en el Servicio Madrileño de Salud” y “La provisión y gestión de los servicios y equipamientos informáticos sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, en colaboración con el Servicio Madrileño de Salud”.

En el actual contexto de transformación digital del sector sanitario, la armonización del dato se ha convertido en un elemento esencial para garantizar la eficiencia, calidad y seguridad de la atención sanitaria. La correcta gestión y estandarización de la información clínica no sólo favorece la toma de decisiones basada en evidencias, sino que también facilita la interoperabilidad entre los distintos sistemas de salud, tanto a nivel nacional como europeo.

En este sentido, la Estrategia Europea de Datos Sanitarios (European Health Data Space, EHDS) promueve un marco común para el intercambio seguro y eficiente de datos de salud, con el objetivo de mejorar la prestación de servicios sanitarios, el desarrollo de políticas de salud pública y la investigación médica. Este esfuerzo de armonización requiere un alineamiento con las iniciativas nacionales y autonómicas, garantizando que los datos sean accesibles, fiables y comparables en diferentes niveles administrativos y geográficos.

La Comunidad de Madrid, debido a la diversidad y heterogeneidad de sus fuentes de datos sanitarios, enfrenta un reto adicional en términos de interoperabilidad y armonización. La coexistencia de distintos sistemas de información en hospitales, centros de salud, laboratorios, farmacias y otros actores del ecosistema sanitario hace necesario un esfuerzo coordinado para la integración y estandarización de los datos. Sin una estrategia clara para armonizar la información, se pueden generar duplicidades, silos de información y barreras para el intercambio ágil y seguro de datos.

Por estas razones, se hace necesario disponer de un Servicio de Armonización del Dato Sanitario, que tendrá como función principal la coordinación de los esfuerzos necesarios para garantizar la interoperabilidad y homogeneización de la información clínica en la Comunidad de Madrid. Este servicio actuará como un punto de referencia para el análisis de estándares, la implementación de los mismos y la colaboración con iniciativas nacionales y europeas en el marco de la EHDS. Con ello, se busca mejorar la eficiencia de los procesos asistenciales, la investigación sanitaria y el desarrollo de políticas públicas basadas en datos de calidad estandarizados, contribuyendo así a un sistema de salud más conectado, seguro y centrado en el paciente.

El contrato se debe llevar a cabo bajo el principio del compromiso con el resultado, en línea con el enfoque de ejecución que plantea el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El contrato cumple con el principio de neutralidad tecnológica. Los criterios de solvencia y adjudicación, así como las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, se han definido sin imponer tecnologías, marcas o soluciones específicas, garantizando así la libre concurrencia de proveedores con diferentes soluciones técnicas que resulten aptas para satisfacer las necesidades establecidas.

Este principio se materializa de forma efectiva en la configuración del expediente que favorece una concurrencia real y no meramente formal, evitando efectos excluyentes y garantizando la igualdad de trato entre los licitadores en la medida que:

- En la definición del objeto del contrato y en el Pliego de Prescripciones Técnicas no se hace referencia a tecnologías concretas admitiéndose soluciones equivalentes que permiten alcanzar los mismos resultados.
- Los criterios de solvencia económica, financiera, técnica y profesional se establecen atendiendo exclusivamente a la capacidad del licitador para ejecutar el contrato, sin vincularse a tecnologías o productos específicos.
- Los criterios de adjudicación valoran la calidad y viabilidad de las propuestas desde una perspectiva funcional y metodológica, y no la utilización de una tecnología determinada, permitiendo soluciones técnicas equivalentes siempre que cumplan los requisitos establecidos.

De este modo, la neutralidad tecnológica se garantiza de manera transversal en el objeto del contrato, en la definición de los requisitos técnicos, en la configuración de los criterios de solvencia y adjudicación y en la promoción de una competencia adecuada, conforme a los principios que rige la contratación pública.

Los servicios se establecen por precios unitarios al no ser posible definir el alcance total de la prestación. Al disponer de un presupuesto máximo asignado con cargo al Plan de Recuperación

Transformación y Resiliencia, se establece un mínimo de Unidades que podrá ser incrementado hasta alcanzar el Presupuesto Base de Licitación (sin sobrepasarlo).

Se trata de un contrato mixto por contener prestaciones propias de servicios y suministro, y encontrarse ambas prestaciones directamente vinculadas entre sí manteniendo una relación de complementariedad que exige su consideración y tratamiento como una unidad funcional, el régimen jurídico y las normas que regirán la adjudicación, son las normas del contrato de servicios, por ser esta la prestación principal al tener un importe superior a las prestaciones de suministro. Todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 18 y 34.2 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

El expediente se tramita mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación en base a los siguientes argumentos:

- Primero: el procedimiento abierto con pluralidad de criterios es uno de los procedimientos ordinarios de adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas (Artículo 131.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público)
- Segundo: el contrato se adjudicará por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en aplicación de los artículos 131.2 y 156.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.
- Tercero: la justificación de la pluralidad de criterios de adjudicación es conforme a lo dispuesto en los artículos 145 de la LCSP respecto a los requisitos y clases de criterios, atendiendo en este caso a una mejor relación calidad-precio sobre la base del precio o coste, y 146 de la LCSP en lo que respecta a su aplicación.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

En la determinación de los criterios se ha dado preponderancia al criterio precio otorgándole un 70% de la puntuación total, fijando en el 25% los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor y un 5% mediante un criterio evaluable mediante la aplicación de fórmulas.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN		PUNTUACIÓN MÁXIMA
A. Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor / SOBRE 2		25
A.1	Propuesta para la implantación CDM en el SERMAS	10

A.2	Propuesta para la codificación de la Genómica en el SERMAS	4
A.3	Propuesta para el desarrollo de un nuevo sistema para Sicyt	4
A.4	Propuesta de metodología para la prestación del servicio	7
B. Criterios/subcriterios evaluables mediante aplicación de fórmula matemática /SOBRE 3		75
B.1	Precio	70
B.2	Unidades de Trabajo mensuales máximas	5
TOTAL		100

A. Criterios cuya cuantificación depende de un Juicio de Valor (máximo 25 puntos)

Dado que el objeto del contrato consiste en la prestación de un servicio técnico especializado, en el que la calidad de la adecuación de la propuesta metodológica es determinante para el éxito del mismo, se incorporan criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor. Estos criterios permitirán seleccionar la oferta que mejor responda a las necesidades del órgano de contratación y así poder conseguir una mejor “calidad/precio”, conforme a lo previsto en el artículo 145 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

Los licitadores presentarán una memoria técnica (sobre nº 2) sobre la prestación del servicio evaluándose los siguientes aspectos:

A.1. Propuesta para la implantación del Common Data Model (CDM) en el SERMAS (máximo 10 puntos)

Se valorará que la propuesta de implantación sea clara, concisa y ajustada a la realidad y necesidades del SERMAS. Se valorará la viabilidad de la propuesta para su implantación acelerada alineada con las necesidades propias de la Comunidad de Madrid, del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de iniciativas internacionales.

Justificación: Se valorará la calidad técnica y viabilidad de la propuesta presentada, atendiendo al grado de adecuación de la propuesta a la realidad organizativa y tecnológica del SERMAS, la definición metodológica de las fases de implantación y el alineamiento con las necesidades de la Comunidad de Madrid, del Sistema Nacional de Salud y con iniciativas internacionales de referencia en materia de modelos comunes de datos sanitarios. La valoración se realizará mediante juicio técnico motivado, sin que la mera descripción genérica de actuaciones sea suficiente para obtener la máxima puntuación.

Este criterio se establece debido a la complejidad técnica y organizativa que conlleva la implantación de un modelo común de datos en un entorno sanitario caracterizado por la coexistencia de múltiples sistemas de información, fuentes heterogéneas y requisitos funcionales

específicos. La adecuada implantación del CDM requiere no solo capacidades técnicas sino también una planificación metodológica específica.

Dado que la calidad, coherencia y viabilidad de dicha planificación no puede evaluarse mediante fórmulas automáticas, resulta necesario someter este aspecto a una valoración técnica motivada, permitiendo valorar la adecuación de la propuesta presentada por cada licitador a las necesidades reales.

A.2. Propuesta para la codificación de la Genómica en el SERMAS (máximo 4 puntos)

Se valorará la calidad y viabilidad de la propuesta metodológica para la codificación de información genómica, así como la planificación detallada de las tareas, atendiendo a su coherencia, secuenciación y adecuación al marco temporal del contrato, de forma que permita asegurar la correcta ejecución de las actuaciones previstas en el plazo establecido.

Justificación: Se establece este criterio de adjudicación por su vinculación directa con el objeto del contrato, que incluye la armonización y estandarización de datos sanitarios complejos y de alto valor clínico, así como su correcta integración en los sistemas de información del SERMAS.

La codificación de la información genómica presenta una especial complejidad técnica, al requerir la aplicación de estándares y nomenclaturas específicas, la definición de reglas homogéneas de codificación y su coherente integración con otros datos clínicos.

La calidad y viabilidad de la propuesta metodológica, así como la correcta planificación y secuenciación de las tareas necesarias para su implantación, no pueden evaluarse mediante fórmulas automáticas, al depender de la adecuación de la solución propuesta al contexto específico del SERMAS, del enfoque técnico adoptado y de la capacidad de ejecución en el marco temporal limitado del contrato.

Este criterio no tiene por objeto valorar la experiencia previa de los licitadores, sino comparar las soluciones metodológicas y los enfoques de ejecución propuestos, permitiendo seleccionar aquella propuesta que ofrezca mayores garantías de correcta ejecución dentro del plazo previsto.

En consecuencia, resulta necesario valorar este aspecto mediante una valoración técnica motivada, que permita apreciar la coherencia, viabilidad y realismo de las propuestas presentada, asegurando que la codificación de la información genómica se ejecute de forma ordenada, eficaz y dentro del plazo previsto, en consonancia con los objetivos del contrato.

A.3. Propuesta para el rediseño y desarrollo del sistema SICYT (máximo 4 puntos)

Se valorará la adecuación de la solución propuesta al entorno tecnológico y organizativo de la DGSD, así como la calidad y viabilidad de la estrategia de migración de la información, para garantizar la continuidad del servicio y minimizar el impacto en los usuarios de los centros y de los servicios centrales durante la transición.

Justificación: Este criterio se justifica por la necesidad de asegurar que la solución planteada se integre adecuadamente en el entorno tecnológico y organizativo de la DGSD, garantizando la

continuidad operativa de los sistemas existentes y minimizando los riesgos asociados a la transición.

El desarrollo de un sistema implica necesariamente procesos de migración de información. Una planificación inadecuada de estos aspectos, podría generar interrupciones del servicio, pérdida de información o un impacto negativo en la actividad asistencial y de gestión. La adecuación de la solución propuesta al entorno de la DGSD, así como la definición de una estrategia de migración con el menor impacto posible en los usuarios no puede evaluarse mediante criterios automáticos.

Este criterio tiene por objeto comparar las propuestas técnicas y metodológicas presentadas, permitiendo seleccionar aquella que ofrezca mayores garantías de implantación segura y alienada con el entorno existente, en consonancia siempre con los objetivos del contrato.

A.4. Propuesta de metodología para la prestación del servicio (máximo 7 puntos)

Se valorará que la propuesta encaje dentro del entorno de la DGSD. Se presente una metodología clara y específica para la gestión de los encargos panificables, se propongan métodos para la valoración de los encargos que sean adecuados a las características de estos. Adicionalmente se detallará la funcionalidad propuesta para el producto de gestión y distribución de formularios normalizados.

Justificación: La correcta ejecución del contrato depende de que la metodología propuesta sea clara, específica y adaptada al entorno de la DGSD, incluyendo la gestión de encargos panificables, la definición de métodos adecuados para la valoración de dichos encargos según sus características y la funcionalidad detallada del producto de gestión y distribución de formularios normalizados. Una metodología inadecuada puede generar errores en la distribución de formularios normalizados produciéndose retrasos en el cumplimiento de los objetivos del contrato.

Dado que la calidad, coherencia y viabilidad de la metodología no pueden evaluarse mediante criterios automáticos, ya que depende de la adaptación al contexto específico de la DGSD, resulta necesario aplicar una valoración técnica motivada, que permita comparar las soluciones metodológicas presentadas por los licitadores y seleccionar aquellas que demuestren una metodología clara, específica y viable, capaz de asegurar la correcta ejecución del servicio y se adapte a los recursos y plazos del contrato.

Además, este criterio es necesario porque permite garantizar que los encargos se gestionen de forma eficiente, que los datos y formularios sean fiables y que la prestación del servicio cumpla con los objetivos del contrato.

En consecuencia, la exigencia de presentar una propuesta metodológica clara, específica y viable constituye un criterio adecuado, proporcionado y necesario, plenamente justificado por la naturaleza del contrato, los riesgos asociados a su ejecución y que garantiza la correcta ejecución del servicio, la adecuada gestión de los encargos y la distribución fiable de formularios normalizados.

Reglas de puntuación

A continuación, se detallan los valores de puntuación que se otorgarán a cada uno de los criterios:

- Excelente (100% sobre la puntuación máxima posible del criterio). Presenta propuesta excelentemente detallada, en todos los aspectos requeridos y para todos los componentes del ámbito de aplicación, con gran aporte de valor para los requisitos del contrato.
- Alta (80% de la puntuación máxima posible del criterio). Presenta propuesta muy bien detallada en los aspectos requeridos, con una muy buena adaptación a la problemática de los componentes del ámbito de aplicación del expediente.
- Medio (60% sobre la puntuación máxima posible del criterio). Presenta propuesta bien detallada en los aspectos requeridos, adaptada de forma suficiente a la problemática de los componentes del ámbito de aplicación del expediente.
- Bajo (40% sobre la puntuación máxima posible del criterio). Presenta propuesta con un nivel bajo de detalle en los aspectos requeridos, generalista o no adaptada de forma suficiente a la problemática de los componentes del ámbito de aplicación del expediente.
- Muy bajo (10% sobre la puntuación máxima posible del criterio). Se asignará esta valoración a aquellas ofertas que presenten una propuesta extremadamente generalista, o con un nivel de detalle muy bajo en los aspectos requeridos.

NOTA: No se incluirá información evaluable mediante la aplicación de fórmulas matemáticas que debe ser incluida en el sobre nº3. La inclusión en el sobre nº2 de información concerniente al sobre nº3 podrá suponer, atendiendo las especiales circunstancias, la exclusión del licitador.

B. Criterios evaluables mediante aplicación de fórmula matemática

Hasta un máximo de 75 puntos.

B.1. Criterio Precio

Hasta un máximo de 70 puntos.

La asignación de puntos se efectuará proporcionalmente a la oferta económica de los licitadores, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Pi = 70 * \sqrt[6]{\frac{BL}{BM}}$$

donde:

Pi = Puntuación otorgada al licitador.

BL = Baja del licitador respecto del Precio Máximo de Licitación

BM = Mayor baja de todas las ofertas válidas presentadas.

Baja = Precio máximo de licitación – Precio de licitación ofertado por el licitador.

Precio de licitación ofertado por el licitador = (Precio licencias ofertado) + (Precio unidad de trabajo (UT) ofertado x 150 UT x 2 meses).

Las ofertas cuyo Precio ofertado supere el Precio máximo de licitación en su conjunto o en cada uno de sus conceptos (suministro y servicios) se excluirán.

En el caso de que todas las ofertas presentadas lo hagan al tipo de licitación todas ellas obtendrán 0 puntos en este concepto.

Se ha establecido una fórmula en la que los valores que resultan de su utilización responden a una distribución proporcional de los puntos a asignar. Otorga una puntuación de 70 puntos, respetando los principios de proporcionalidad y reparto equitativo de las puntuaciones, cumpliendo la condición de que ofertas más económicas no pueden recibir una puntuación inferior a la otorgada a ofertas menos económicas, guardando la adecuada proporción en la atribución de puntos a las intermedias.

En el presente expediente no se ha optado por una fórmula linealmente proporcional para la valoración del criterio precio, sino por una fórmula no lineal basada en la raíz sexta. Esta elección atiende a las características específicas del contrato y a la necesidad de evitar efectos distorsionadores derivados de bajas económicas excesivas. La fórmula empleada garantiza, en todo caso, el respeto por los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y reparto equitativo de las puntuaciones, asegurando que las ofertas más económicas no obtengan una puntuación inferior a la de ofertas menos económicas.

La utilización de una fórmula no lineal resulta adecuada en este contrato atendiendo a su complejidad técnica y a la necesidad de un conocimiento especializado de las prestaciones que lo integran y de garantizar la viabilidad económica y técnica de la ejecución del mismo. En este contexto una ponderación estrictamente lineal del precio podría incentivar bajas anormalmente elevadas que comporten riesgos relevantes de incumplimiento, reducción de la calidad técnica o necesidad de posteriores modificaciones contractuales.

La fórmula basada en la raíz sexta evita que variaciones de precio relativamente pequeñas produzcan diferencias desproporcionadas en la puntuación y favorece una competencia equilibrada entre las ofertas que, sin ser necesariamente las más bajas, presentan propuestas técnicamente solventes y coherentes con los objetivos del presente contrato.

Con el empleo de esta fórmula se respeta los principios de proporcionalidad y reparto equitativo de las puntuaciones, garantizando que las ofertas económicamente más ventajosas no obtengan una puntuación inferior a la de las ofertas de mayor importe, manteniendo la adecuada proporción en la atribución de puntos a las intermedias.

En consecuencia, la elección de una fórmula no lineal basada en la raíz sexta se considera proporcionada, razonable y adecuada a las características del contrato, permitiendo garantizar una concurrencia real y seleccionar la oferta económicamente más ventajosa en términos de viabilidad y calidad.

B.2 Criterio Unidades de Trabajo mensuales máximas (5 puntos)

Hasta un máximo de 5 puntos.

La asignación de puntos se efectuará proporcionalmente a la oferta de máximo número de unidades de trabajo que está dispuesto a ofrecer para la ejecución de encargos de trabajo a lo largo de un mes.

Se asignarán puntos de manera proporcional al número máximo de UT que se ofrecen para ejecutar en un mes según las siguientes fórmulas:

- Si UT_i es igual o menor que 150 UT

$$P_i = 0$$

- Si UT_i es mayor de 150 UT

$$P_i = 5 * \frac{UT_{\text{máx}}}{UT_i}$$

donde:

P_i = Puntuación otorgada al licitador i.

UT_i = Oferta de unidades de trabajo máximas que se compromete a ejecutar en un mes.

$UT_{\text{máx}}$ = Mayor oferta de UTs por mes de todas las ofertas válidas presentadas.

Composición del comité de expertos (o procedimiento para su designación) u organismo técnico especializado: No procede.

Plazo en que deberá efectuarse la valoración por el comité de expertos u organismo técnico especializado: No procede.

OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomará en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales en el criterio Precio, siendo los límites para apreciar que se da en aquella dicha circunstancia, los siguientes:

- Si se presentase un único licitador, se considerará que incurre en presunción de valor anormal si su oferta es inferior al presupuesto de licitación en más de 20 unidades porcentuales.
- En el caso que sean varias las ofertas, se considerará como desproporcionada o anormal, las que sean inferiores en 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las proposiciones presentadas.

Si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.b) de la LCSP cuando los pliegos prevean la aplicación de más de un criterio de adjudicación los parámetros objetivos para determinar que una oferta se encuentra incurso en baja anormal o desproporcionada deben basarse en el conjunto de

la oferta, esto es, en el conjunto de los criterios de adjudicación, se ha de indicar que en el presente expediente de contratación se ha optado por aplicar un criterio de baja anormal referido exclusivamente al precio ya que se considera que es el único elemento objetivo que permite determinar si una oferta puede ser inviable. Al ser el precio el criterio con mayor puntuación se considera que, con independencia del grado de calidad ofertado, este parámetro es suficiente para determinar aquellas ofertas que se encuentren en presunción de anormalidad, no siendo necesario añadir otros criterio o parámetros.

CRITERIOS DE SOLVENCIA

La relación calidad-precio se pretende garantizar también con la solvencia económica, la solvencia técnica y el compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de los medios personales solicitados, debido a la especificidad técnica y el perfil del personal que se ha de adscribir al servicio, tal como viene recogido en el artículo 76.2 de la LCSP.

El empresario deberá acreditar requisitos de específicos de solvencia, ya que los servicios objeto de este contrato y el CPV no están incluidos en el Anexo II del RGLCAP y, por lo tanto, no procede solicitar clasificación.

Solvencia económica y financiera

Conforme a la letra a) del apartado 1 del artículo 87 de la LCSP, el criterio para acreditar la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de las actividades del empresario y de presentación de las ofertas. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato.

El importe anual solicitado para la solvencia económica y financiera (2.245.230,00 €) se ha calculado multiplicando el valor estimado del contrato por 1,5.

Solvencia Económica = $1.496.820,00 \text{ €} * 1,5 = 2.245.230,00 \text{ €}$

Acreditación documental:

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

En el caso de estar inscritos en el Registro Mercantil se acreditará mediante certificación expedida por el Registro Mercantil o por medio de copia de las cuentas depositadas expedida por dicho registro. En el caso de aportarse únicamente el certificado deberá acompañarse de una copia de las cuentas presentadas.

Justificación: La exigencia de solvencia económica y financiera en el presente contrato mixto de servicios de armonización, estandarización y disponibilidad de datos, junto con el suministro de licencias de herramientas software asociadas, se justifica en la necesidad de garantizar que los licitadores disponen de una capacidad económica suficiente para afrontar, desde el inicio del contrato, las obligaciones económicas derivadas de su ejecución.

El volumen anual de negocios del licitador constituye un indicador adecuado y proporcionado de su capacidad económico-financiera, al reflejar su aptitud para asumir compromisos económicos relevantes sin comprometer la correcta ejecución del contrato ni generar riesgos de interrupción del servicio.

El umbral mínimo exigido cumple con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público y guarda una relación directa y proporcional con el objeto, alcance y características del contrato.

Asimismo la posibilidad de acreditar la solvencia mediante el volumen de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, atendiendo a la fecha de constitución o de inicio de actividad del empresario, y su acreditación a través de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, garantiza la objetividad, verificabilidad y transparencia del requisito, sin introducir restricciones injustificadas a la libre concurrencia.

Por tanto, el nivel de solvencia económica y financiera exigido permite minimizar el riesgo asociado a la ejecución del contrato, proteger adecuadamente el interés público y al mismo tiempo, favorecer la participación de licitadores que cuenten con una estructura financiera suficiente, respetando los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y competencia efectiva.

Solvencia técnica o profesional

Conforme a la letra a) del apartado 1 y el apartado 3 del artículo 90 de la LCSP, la empresa deberá acreditar la ejecución de servicios o trabajos de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, Para verificar la similitud se comparará el objeto del contrato ejecutado con el que es objeto de esta licitación. Además, y para el caso de los contratos públicos, se podrá acudir a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV como elemento comparativo. En el conjunto de los certificados aportados se podrá acreditar solo uno, dos, o los tres códigos CPV.

El importe anual acumulado de los certificados, en el año de mayor ejecución, deberá ser igual o superior a 1.047.774,00 €.

El importe anual solicitado para la solvencia técnica o profesional (1.047.774,00 €) se ha calculado teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 90.2 de la LCSP, en el que se indica que, el importe anual acumulado de los servicios efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, debe ser igual o superior al 70 por ciento del valor estimado del contrato.

Se ha multiplicado el importe sin IVA del contrato por 0,7.

Solvencia Técnica = 1.496.820,00 € * 0,7 = 1.047.774,00 €

Acreditación documental:

- Relación firmada por el representante legal de la empresa en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.
- Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. Los certificados deben incluir el objeto del servicio lo más detallado posible, el importe por periodos anuales, las fechas y el destinatario, público o privado de los mismos.

Justificación: La correcta ejecución del contrato exige que el adjudicatario cuente con experiencia previa en proyectos de naturaleza igual o similar, en los que se hayan abordado procesos de estandarización, armonización y normalización de datos, dado que el objeto no se limita a la mera prestación de un servicio tecnológico, sino que persigue la unificación y puesta en disposición de datos procedentes de distintas fuentes, de forma que resulten coherentes, interoperables y utilizables. La ausencia de dicha experiencia comprometería la ejecución del contrato al dificultar la implementación a un modelo estandarizado que garantice que los datos sean normalizados y organizados de acuerdo con estándares internacionales

Se considera adecuado exigir la acreditación de la realización de servicios o trabajos de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto del contrato, ejecutados como máximo en los tres últimos tres años, de conformidad con lo previsto en el artículo 90.2 de la LCSP. Esta limitación temporal responde a la necesidad de asegurar que la experiencia acreditada sea reciente y técnicamente actualizada, habida cuenta de la rápida evolución de las tecnologías y herramientas software vinculadas al tratamiento y gestión de datos.

El importe mínimo anual exigido para acreditar dicha solvencia, fijado en 1.047.774,00 €, guarda relación directa y proporcionada al valor estimado del contrato y con el presupuesto base de licitación, garantizando que los licitadores disponen de una experiencia económica relevante en proyectos comparables, sin que ello suponga una restricción injustificada de la concurrencia.

La acreditación mediante certificados de buena ejecución permite verificar de forma objetiva la realidad de los trabajos realizados, su correcta ejecución y su adecuación al objeto contractual. En el caso de contratos del sector público, se admite la identificación de los trabajos mediante los tres primeros dígitos de los correspondientes códigos CPV, lo que aporta seguridad jurídica homogeneidad y facilidad de comprobación.

En consecuencia, la solvencia técnica y profesional exigida resulta adecuada, necesaria y proporcionada, al tiempo que asegura la correcta ejecución del contrato, minimizar los riesgos técnicos asociados a su desarrollo y respeta los principios de igualdad de trato, transparencia y competencia efectiva.

Concreción de las condiciones de solvencia

1. Especificación en la oferta de los nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato: NO
2. Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales: SI

En virtud de lo establecido en el artículo 76.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, todas las empresas deberán presentar una declaración responsable según modelo del ANEXO III del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a incluir en el sobre 1, en la que se comprometan a adscribir un equipo mínimo conforme a lo establecido en el apartado 10 “REQUISITOS Y CUALIFICACIÓN DE LOS PERFILES” del pliego de prescripciones técnicas, el cual deberá cumplir con los requisitos mínimos de titulación, formación y experiencia exigidos en dicho apartado.

A este compromiso, referido a la adscripción de medios personales y que se integrará en el contrato, se le atribuirá el carácter de obligación esencial, a los efectos de lo previsto en el artículo 211.1.f) de la LCSP y tendrá una vigencia desde su firma hasta la finalización del contrato objeto de este expediente de contratación.

En los casos en que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras empresas, de conformidad con el art. 140.1.c), cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable con la información pertinente.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de contratos del Sector Público, el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que presente la documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios personales indicados en los párrafos anteriores, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra. Esta documentación deberá presentarse en formato electrónico.

La documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios personales será:

- El currículum de los integrantes del equipo de trabajo a adscribir, señalado u ofertado, que debe cumplir con los requisitos mínimos de titulación, formación y experiencia establecidos en el apartado 10 “REQUISITOS Y CUALIFICACIÓN DE LOS PERFILES” del pliego de prescripciones técnicas. Dicho currículum deberá presentarse ajustado al modelo establecido en el anexo VI “Cuestionario de Personal” del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, especificando la cualificación profesional, con detalle de perfil técnico, titulación, formación y experiencia profesional.
- La copia del correspondiente título, diploma o documento equivalente que acredite la correspondiente titulación y formación.
- La experiencia podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia, como entre otros, un certificado expedido por la Administración Pública, o empresa privada en la que han prestado los servicios.

El adjudicatario propuesto deberá aportar el compromiso del personal ofertado, (Compromiso firmado por ambas partes), acreditando su disponibilidad para incorporarse a la plantilla que va a encargarse de la prestación objeto del contrato.

Justificación solicitud adscripción de medios personales

Dadas las características del servicio a desarrollar y la experiencia de la Dirección General de Salud Digital en proyectos de similar naturaleza, se han establecido los requisitos mínimos indicados en el apartado 10 "REQUISITOS Y CUALIFICACIÓN DE LOS PERFILES" del Pliego de Prescripciones Técnicas, que se consideran adecuados, necesarios y proporcionales, incidiéndose en experiencia en servicios digitales. De esta forma se pretende garantizar la correcta y óptima realización del proyecto.

Los requisitos profesionales solicitados garantizan que las empresas participantes en la licitación disponen de la especialización necesaria en las materias que afectan y están directamente relacionadas con la ejecución de los servicios objeto del contrato, como es la normalización, estandarización y homogeneización de datos sanitarios. De igual manera, los requisitos profesionales exigidos permiten asegurar que los perfiles que van a llevar a cabo la ejecución del proyecto poseen un conocimiento experto que permita afrontar cualquier posible eventualidad relacionada con el contrato y aportar soluciones viables, desde el punto de vista técnico y funcional, del mismo modo que permiten que los trabajos se desarrollen con la máxima exactitud y precisión.

Así pues, los requisitos profesionales exigidos se consideran razonables, adecuados y proporcionales al objeto del contrato, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 76.3 de la LCSP.

JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES

De conformidad con lo previsto en el artículo art. 99.3.b) de la LCSP, se ha optado por la no división en lotes del presente contrato al apreciarse que la realización independiente de las prestaciones comprendidas en su objeto dificultaría de forma sustancial y objetiva la correcta ejecución del contrato, hasta el punto de comprometer su viabilidad técnica y funcional.

El objeto del contrato comprende actuaciones estrechamente interrelacionadas y técnicamente inseparables, consistentes en la normalización, estandarización y homogeneización de datos sanitarios junto con su implantación y explotación mediante herramientas y soluciones software destinadas a garantizar la interoperabilidad entre distintos sistemas de información. Estas actuaciones no constituyen fases autónomas, sino procesos encadenados y dependientes entre sí, en los que las decisiones adoptadas en una prestación condicionan de forma directa e inmediata el resultado de las restantes.

La eventual división en lotes supondría que distintos contratistas intervinieran sobre los mismos conjuntos de datos, modelos de información y soluciones tecnológicas, generando riesgos relevantes de incompatibilidad técnica, incoherencias en los modelos de datos, errores de integración y dificultades en la trazabilidad de responsabilidades, con incidencia directa en la calidad de la información y en última instancia, en los procesos asistenciales y en el ciudadano.

Desde un punto de vista técnico la ejecución separada de las prestaciones impediría garantizar la interoperabilidad y coherencia global del sistema, ya que requeriría una coordinación permanente y altamente especializada entre adjudicatarios distintos, coordinación que no puede asegurarse contractualmente con un nivel de eficacia equivalente al de una ejecución unitaria. Esta fragmentación incrementaría de manera significativa el riesgo de retrasos y fallos funcionales comprometiendo los objetivos del contrato y su plazo de ejecución.

Asimismo, la división en lotes podría dar lugar a situaciones de inviabilidad práctica del contrato, en particular en el supuesto de que alguno de los lotes quedara desierto o no alcanzara una ejecución satisfactoria, lo que produciría la paralización total o parcial de un servicio concebido como un conjunto funcional único, sin posibilidad de sustitución inmediata y con impacto directo en el resto de las prestaciones.

Adicionalmente, la gestión y supervisión de múltiples adjudicatarios requeriría una capacidad de coordinación, control técnico y resolución de incidencias que excede de los medios personales y materiales disponibles en la DGSD, lo que agravaría los riesgos descritos y afectaría negativamente a la correcta ejecución del contrato.

En este contexto, la no división en lotes no supone una restricción injustificada de la competencia, sino que responde a una necesidad objetiva derivada de la complejidad técnica y funcional del contrato, garantizando la responsabilidad sobre el resultado final recaiga sobre un único adjudicatario, de forma clara e inequívoca, y permitiendo una ejecución coherente, integrada y técnicamente viable del conjunto de prestaciones.

Por todo lo anterior, se considera justificada la no división en lotes del presente expediente, al resultar necesaria para asegurar la correcta ejecución técnica del contrato, evitar riesgos operativos relevantes y garantizar el cumplimiento efectivo de los fines públicos perseguidos.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

En la línea de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 202 de la ley 9/2017, para la ejecución de este contrato, se fijan las siguientes consideraciones de tipo social como condiciones especiales de ejecución del contrato que deberá aportar el licitador propuesto como adjudicatario.

Como condición especial de ejecución el propuesto como adjudicatario deberá presentar una declaración responsable donde se especifique al menos uno de los siguientes criterios de carácter social, vinculados con la prestación del servicio que se oferta:

1. Que, en el caso de nuevas contrataciones, bajas o sustitución de las personas trabajadoras ligadas al contrato, se favorezca la contratación de trabajadores desempleados.

Para su acreditación se exigirá relación firmada por el representante legal de la empresa del personal adscrito al contrato al inicio de su ejecución y copia del nuevo contrato que acredite la condición de desempleado.

2. Que se favorezca la conciliación de la vida personal y laboral de las personas trabajadoras adscritas al contrato a través de medidas tales como flexibilidad de horarios laborales de entrada y salida en el trabajo, teletrabajo, u otras medidas alternativas.

Para su acreditación se deberá aportar un certificado durante la vigencia del contrato donde se especifique el número de empleados adscritos al contrato acogidos a alguna de las medidas que favorezcan la citada conciliación, indicando las personas acogidas, medida a que se acogen y documentación acreditativa de tales circunstancias. Se aportará un documento firmado entre la empresa

Esta condición especial de ejecución se considera obligación contractual esencial a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la LCSP.

INSUFICIENCIA DE MEDIOS

Todas estas necesidades solo pueden ser satisfechas por una entidad con la experiencia y los recursos materiales y personales capacitados para ejecutar estas actuaciones, algo indispensable para lograr la correcta ejecución del contrato.

De cara a la correcta realización de estas tareas propias de este proyecto y, por otro lado, la carencia de personal propio con la adecuada especialización en las tareas de normalización, estandarización y homogeneización de datos sanitarios, para garantizar la efectiva interoperabilidad entre sistemas informáticos, se hace necesario impulsar este expediente.

Para la correcta realización del objeto de este contrato es necesario disponer de una plantilla con los perfiles solicitados (Jefe de Proyecto, Consultor, Arquitecto, Ingeniero). Se trata de perfiles con una cualificación técnica específica para estandarizar y normalizar datos. El personal disponible carece de cualificación técnica específica necesaria para realizar el objeto del contrato. Ante la ausencia de recursos internos suficientes se hace necesario contratar con terceros para asegurar la calidad, eficacia y viabilidad del proyecto.

En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la LCSP, se justifica la necesidad de contratar con terceros especializados en el ámbito de la estandarización y normalización de datos sanitarios que preste el servicio acorde a las indicaciones especificadas en el pliego de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares, dada la insuficiencia e idoneidad de los medios propios disponibles para llevar a cabo la ejecución del contrato.

Es por ello que se considera necesario e imprescindible proceder a la contratación de los servicios requeridos, de acuerdo con las condiciones indicadas en la documentación del expediente de contratación.


CONCLUSIÓN

Para dar cumplimiento a las necesidades descritas, se propone la contratación de un SERVICIO DE ARMONIZACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE DATOS Y EL SUMINISTRO DE LICENCIAS ASOCIADAS CON LOS SERVICIOS DE ARMONIZACIÓN EN EL SERVICIO

MADRILEÑO DE SALUD”, en los términos previstos en los pliegos de referencia, por el plazo de vigencia allí indicado y con el coste detallado en la memoria económica.

Madrid,

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD DIGITAL

Firmado digitalmente por: NURIA RUIZ HOMBREBUENO - 
Fecha: 2026.01.26 08:12